

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA
ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA

Medellín, diecinueve de julio de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05001 22 03 000 2023 00320 00
Proceso	Conflicto - Ejecutivo
Demandante	RCI Colombia s.a. Compañía de Financiamiento
Demandado	Paula Andrea Buitrago Ocampo
Procedencia	Juzgado Tercero Civil Municipal de Envigado y Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de La Estrella
Decisión	Dirime conflicto, Asigna competencia al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de La Estrella
Tema	Factores de competencia. Domicilio
Rdo. interno	065-23
Interlocutorio No.	-23

Procede el Despacho a pronunciarse con relación al conflicto negativo de competencia suscitado entre el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO y el JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE LA ESTRELLA, respecto del proceso ejecutivo de la referencia.

1. ANTECEDENTES

Presentó la sociedad RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, solicitud de aprehensión y posterior entrega del vehículo de placas JYX440 de propiedad de la deudora PAULA ANDREA BUITRAGO OCAMPO, sobre el cual éste había constituido garantía prendaria a favor de aquélla, dirigida al JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA (REPARTO).

Dicho trámite le fue repartido al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO, quien, mediante auto del 17 de abril de 2023, rechazó la aludida petición, considerando que carecía de competencia, *atendiendo que el domicilio y*

vecindad del deudor y de ubicación del bien dado en prenda sin tenencia del acreedor, corresponde a la CALLE 98 DD SUR # 50 – 39 INTERIOR 102 DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA conforme la solicitud y los documentos anexos a la demanda, especialmente, del Formulario de Registro de Ejecución, el escrito de solicitud de entrega voluntaria, la demanda y el poder otorgado, se deduce que, el bien objeto de la garantía mobiliaria se encuentra en su poder y que será entonces, en dicha localidad, el lugar donde ha de practicarse la diligencia pretendida y lugar donde se ubica el bien que soporta la prenda”, ordenando su remisión al Juzgado Promiscuo Municipal de La Estrella – Antioquia (Reparto), por estimar que era éste quien debía avocar el conocimiento del asunto referenciado (Fol. 60 y 61/Archivo 02 del expediente de aprehensión).

En cumplimiento de lo anterior, le fue asignado el asunto referenciado al JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE LA ESTRELLA, quien mediante auto del 13 de julio del año que transcurre, se rehusó a avocar el conocimiento del mismo, aduciendo su falta de competencia en razón de que la parte demandante había manifestado desconocer el paradero del rodante objeto de aprehensión, escogiendo de manera libre y voluntaria, la jurisdicción del municipio de Envigado, lo que no podía ser desconocido por el operador jurídico a quien inicialmente le había sido repartido, conforme con los reiterados pronunciamientos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha dejado sentado que en estos casos el demandante hace la elección de la sede judicial de acuerdo con el numeral 7° y no conforme al numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso (Archivo 02).

Con fundamento en lo anterior, propuso el conflicto negativo de competencia y dispuso remitir el expediente a esta Corporación para que fuera dirimido el mismo.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia para dirimir el conflicto. Este Despacho es competente para conocer y decidir del presente conflicto por ser el superior funcional de los dos juzgados en conflicto, conforme lo establecido en el precepto 139 del Código General del Proceso, ya que conocen asuntos en materia civil, de igual categoría, esto es, municipal y pertenecientes al distrito judicial de Medellín, por estar localizados uno en Envigado y otro en La Estrella

2.2. Factores de competencia. Es la forma como se distribuye el conocimiento de los diferentes procesos en los distintos órganos judiciales de una misma especialidad, para lo cual se tienen en cuenta los factores *subjetivo*, que alude a la calidad de las partes; el *objetivo*, que se refiere a la naturaleza del asunto y su cuantía; el *territorial*, que hace referencia al domicilio, lugar de ubicación de los bienes objeto de la demanda, entre otros; el de *conexión*, en razón del cual se permite acumular pretensiones que son competencia de diferentes jueces, en los casos que expresamente lo contemple la ley; y el *funcional*, que tiene en consideración la categoría y jerarquía de los funcionarios, para que se cumpla con la doble instancia.

El artículo 28 del Estatuto Procesal Civil establece una serie de reglas que dan lugar a los llamados foros o fueros que determinan el sitio (competencia territorial), donde puede el ciudadano demandar o ser demandado y obtener el reconocimiento y la declaración judicial de sus derechos o la ejecución de los mismos; los aludidos foros, por expresa disposición legal y en atención a las circunstancias propias, operan de **manera privativa**, en caso de que se imponga repeliendo cualquier otro, o **concurrente**, cuando, por el contrario, coinciden con otro u otros sucesivamente, es decir uno a falta de otro, o por elección si se autoriza al actor para elegir entre varias opciones que la ley señala.

3. CASO CONCRETO.

Establece el artículo 28 del Código General del Proceso, como se indicó con antelación, las pautas para establecer la competencia por dicho factor, previendo como regla general su determinación por el fuero personal, esto es, que “...*salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado*”; no obstante, en el numeral 7º de la misma preceptiva, se contempla una excepción a dicha regla, para los casos en los que se ejerciten derechos reales, será competente, de modo privativo, **el juez del lugar donde estén ubicados los bienes** y que, de encontrarse en diferentes circunscripciones territoriales, lo será el de cualquiera de ellas, **a elección del demandante**, norma aplicable al caso concreto, conforme con lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia¹:

¹ Citada en auto AC1979 del 26 de mayo de 2021. Radicación 11001-02-03-000-2021-00556-00. Ver también AC2218-2019, del 10 de junio de 2019 y AC008-21 de enero 18 de 2021. Radicación 11001-02-03-000-2020-03528-00.

“...es necesario mencionar que si bien en el pasado la Corte aplicó el numeral 14 del artículo 28 del Código General del Proceso para resolver conflictos de competencia atinentes a diligencias de “aprehensión y entrega” 5, un replanteamiento del tema ha llevado a cambiar ese criterio, para en definitiva entender que en esa clase de peticiones propias de la modalidad de pago directo prevista en el artículo 60 de la Ley de garantías Mobiliarias, ciertamente se está haciendo ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su crédito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro está, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual carece de tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial, que de manera más cercana encaja en el caso, es la del numeral séptimo del artículo 28 de la Ley 1564 de 2012, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de economía procesal e inmediación, habida cuenta que al juez a quien mejor y más fácil le queda disponer lo necesario para la “aprehensión y entrega” es, sin duda, al del sitio en el que esté el bien objeto de la diligencia”

Clarificado que esta es la regla aplicable al caso concreto, resulta preciso entonces establecer si los supuestos aducidos en el libelo genitor, encajan en los considerados expuestos por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre la competencia de estos asuntos, para estimar que para el *sub judice*, resultaba procedente que la demandante pudiera optar por formular este trámite en cualquier lugar del territorio nacional, como se aduce en el acápite “COMPETENCIA Y CUANTÍA” de la demanda.

Del estudio de la jurisprudencia emitida por la citada Corporación en asuntos semejantes, pudo evidenciar este despacho que efectivamente en determinados asuntos de aprehensión y entrega de garantía mobiliaria, ha definido la posibilidad del demandante de optar por presentar dicha solicitud en cualquier sede de la circunscripción nacional; sin embargo, ha señalado que no basta con la afirmación de que el vehículo puede circular en todo el territorio nacional para de manera indefectible conferir a la demandante dicha atribución, sino que en cada caso en concreto, además, se ha apoyado en las condiciones establecidas en el contrato con relación a la ubicación del bien dado en garantía, y/o en cualquier otro documento que acredite el lugar donde posiblemente se encuentra rodando el vehículo.

Es así como en el auto AC516-2022 del 21 de febrero de 2022², expuso:

“4. Para el caso concreto, nótese que en el libelo introductorio la parte

² Radicación n.º 11001-02-03-000-2022-00348-00

demandante manifestó que «desconoce el lugar exacto donde el Deudor y/o Garante tiene el bien mueble pignorado», por lo que, en su sentir, quedó habilitado para interponer la solicitud en cualquier parte del territorio, teniendo en cuenta que el automotor puede ser ubicado en cualquier lugar de la nación.

*Sin embargo, **dicha aseveración no es suficiente para establecer la competencia por el fuero real**, por lo genérico de su expresión y por estar desprovista de un sustento probatorio mínimo.*

*En estos casos, **se debe contrastar con los datos militantes en el expediente**, de acuerdo con los cuales, se puede deducir por lo menos de momento, que el vehículo materia de la garantía real está en el municipio de El Santuario (Antioquia), pues el contrato de prenda abierta sin tenencia, aporta un elemento para determinar que la competencia (privativa) es de la agencia judicial de ese municipio.*

Sobre el particular, nótese que en el literal f) de la cláusula sexta, se prevé que es obligación del garante “notificar a EL ACREEDOR GARANTIZADO cualquier cambio de residencia y oficina y de ubicación de vehículo”, sin que se observe en los anexos ningún documento en el que conste alguna manifestación en tal sentido, lo que lleva a colegir que Walther Arbey Gallo Zuluaga aún habita en ese municipio y por contera, que allí permanece el bien; por lo tanto, la competencia corresponde, privativamente, al juez de El Santuario.” (Resalto intencional).

Así las cosas, examinado el contrato de prenda sin tenencia con fundamento en el cual se invoca la aprehensión y posterior entrega del vehículo propiedad del demandado, puede advertirse que en la cláusula CUARTA se estableció (Fol. 20 a 27/Archivo 01):

“UBICACIÓN: El(los) vehículo(s) descritos (s) en la cláusula primera y objeto de esta prenda y garantía mobiliaria permanecerá(n) en la ciudad y dirección atrás indicados. EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) Y/O DEUDOR(ES) no podrá(n) variar el sitio de ubicación de(los) vehículo(s) dado(s) en prenda, sin previa autorización escrita y expresa de RCI COLOMBIA, pero gozará(n) del uso permanente del(los) mismo(s) para efectos de desarrollar su actividad circunstancia que autoriza RCI COLOMBIA.”

Y al verificarse ésta, se advierte que las direcciones indicadas con antelación a dicha cláusula son la del DEUDOR 1, PAULA ANDREA BUITRAGO OCAMPO, la del ACREEDOR GARANTIZADO y la del CONSTITUYENTE 1, mismo deudor, debiendo ser considerada como tal, la señalada para el deudor y constituyente por ser quien tenía la tenencia del vehículo gravado, la cual es “CL 98DD SUR 50-39 IN 102” del Municipio de La Estrella.

Por tanto, considerando que éste fue el lugar acordado contractualmente para la ubicación del bien dado en garantía, sin que de ningún otro elemento arribado a la solicitud se evidencie que la deudora haya informado el cambio del mismo como lo exige la cláusula que viene de transcribirse, debe considerarse, por el momento, que se mantiene dicha ubicación, recayendo la competencia para conocer del presente asunto en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de La Estrella.

A igual conclusión arribó la Corte, al definir la competencia en caso muy similar al que ahora se analiza³:

“El contrato de prenda sin tenencia y garantía mobiliaria arribado con el pliego introductor, en la cláusula cuarta denominada “ubicación” (fls. 8-11, c. 1) reza que:

[e]l(los) vehículos(s) descrito(s) en la cláusula primera y objeto de esta prenda y garantía mobiliaria, permanecerá(n) en la ubicación y dirección atrás indicados. EL(LOS) CONSTITUYENTE(S) Y/O DEUDOR(ES) no podrá(n) variar el sitio de ubicación del(los) vehículo(s) dado(s) en prenda, sin previa autorización escrita y expresa de RCI COLOMBIA (...). (subrayado ajeno al texto).

Al respecto el documento aludido refiere 3 direcciones a saber: la primera, da cuenta de que el deudor tiene por domicilio la carrera 49 # 76-38 de Medellín; la otra, señala el de la constituyente en la carrera 49 # 76-38 de “Nechí”; y finalmente, el de la acreedora, esto es, la carrera 49 # 39 sur - 100 de Envigado. La última “dirección” deber ser descartada para los efectos de la cláusula aludida, en la medida en que resulta obvio que la garantizada no tiene la tenencia del bien. Las otras dos podrían generar en primer momento confusión como quiera que se hace referencia a una misma nomenclatura pero en dos municipalidades distintas; sin embargo, la eventual disparidad se resuelve si en cuenta se tiene que la solicitud se identificó en el aparte “notificaciones” que “la garante recibirá notificaciones en la dirección física CR 49 # 76-39 de la ciudad de Medellín” (fl. 27, dno.11).

De allí se colige que la “ubicación” del vehículo convenida por las partes, coincide con el “domicilio” del deudor y de la constituyente de la garantía, pues al no haberse informado por la acreedora que autorizó el cambio de lugar de permanencia del rodante, genera, al menos liminarmente, una presunción de certidumbre sobre su localización.”

CONCLUSIÓN

Corolario de lo expuesto, la competencia para conocer de la solicitud de aprehensión y entrega de la garantía mobiliaria, recae en el JUZGADO TERCERO

³ AC1464-2020 del 21 de julio de 2020. Radicado 11001-02-03-000-2020-00810-00.

PROMISCOU MUNICIPAL DE LA ESTRELLA, por ser éste el lugar de ubicación del vehículo dado en prenda, de acuerdo con las condiciones del contrato, sin que exista prueba de su variación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,

RESUELVE:

PRIMERO. SE DECLARA COMPETENTE al JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE LA ESTRELLA, para conocer de la solicitud de aprehensión y posterior entrega de garantía mobiliaria, formulada por RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, en contra de la señora PAULA ANDREA BUITRAGO OCAMPO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SE ORDENA a la Secretaría que remita el presente asunto al citado despacho judicial, e informe lo acá decido al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022